

Poder Judicial de la Nación

Sala II – FLP 68978/2018/56/CA17

S., C. G. s/falta de acción

Juzgado 8 – Secretaría 16

///nos Aires, 03 de julio de 2025.

VISTOS: Y CONSIDERANDO:

USO OFICIAL

I. Que las presentes actuaciones se elevaron a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación deducido por el Dr. Pablo E [REDACTED], apoderado de la Unidad de Información Financiera, contra la decisión adoptada por el Sr. Juez de grado a través de la cual resolvió hacer lugar a la excepción de falta de acción articulada y apartar al citado organismo del rol de parte querellante asumido tanto en esta causa como en la conexas CFP 3611/2023.

II. A criterio del recurrente, lo decidido provoca un perjuicio irreparable no sólo a la parte sino a todo el Estado nacional, en virtud de que pone en riesgo cientos de causas –con eje en el lavado de activos, en el financiamiento del terrorismo y de armas de destrucción masiva- se sustentan en años de trabajo y recursos de la UIF, exponiendo al país a una responsabilidad internacional a tenor de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional.

Agregaron que la decisión es arbitraria, en tanto el juez no dio respuesta a los argumentos desarrollados por la UIF al contestar los planteos de las defensas, los cuales tienen a evidenciar que a partir de la fecha de vigencia del Decreto 274/2025, la Administración no seguirá autorizando a la UIF a constituirse como parte querellante, pero no establece el cese de su intervención en las querellas anteriores en las cuales la Unidad ya se encuentra investida de ese carácter. Concluye señalando que aplicar de manera retroactiva el citado Decreto sería realizar una interpretación extensiva de la norma en cuestión, por fuera de la literalidad del texto, violando así el principio de legalidad consagrado en la



Constitución Nacional y el espíritu de la norma, que nunca fue el de apartar a la UIF de causas como esta.

Los agravios fueron sostenidos en esta instancia, a la vez que las defensas técnicas de C. G. S -a cargo de los Dres. Diego María O [REDACTED] y Hernán G [REDACTED]-, de I. E. R. -a cargo del Dr. Claudio José C [REDACTED]-, de J. R. F. -a cargo del Dr. Hernán Gustavo T [REDACTED]-, de R. Z. -a cargo de los Dres. Alejandro F [REDACTED] y Guillermo A [REDACTED]-, y de F. P. -a cargo de los Dres Roberto V [REDACTED] y Hernán J [REDACTED] L [REDACTED]-, expusieron ante esta Alzada las razones por las cuales lo decidido debe ser confirmado.

III. La respuesta a la articulación recursiva exige repasar brevemente el contexto normativo que rodea la actuación de la Unidad de Información Financiera para luego detenernos en el hito normativo que modificó sus facultades de actuar en causas penales.

Creada por la Ley 25.246, a la Unidad de Información Financiera -órgano con autonomía y autarquía financiera que funciona dentro de la órbita del Ministerio de Justicia- se le asignaron como funciones el análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos vinculados al lavado de dinero -asociado a determinados hechos precedentes, como la defraudación a la administración pública, el contrabando agravado o el narcotráfico-, al financiamiento de terrorismo y al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

En lo que aquí respecta, entre las facultades legales se encontraban las de solicitar colaboración al Ministerio Público Fiscal para obtener información y formalizar requerimientos a los jueces competentes -tales como allanamientos requisas y secuestros-. Pero también se establecía que “*Cuando la Unidad de Información Financiera (UIF) haya agotado su análisis, en el marco de su competencia, y surgieren elementos de convicción suficientes para establecer la existencia de un hecho, operación u operatoria sospechosa de lavado de activos, de financiación del terrorismo o de financiamiento de la proliferación de armas de*

Fecha de firma: 03/07/2025

Alta en sistema: 04/07/2025

Firmado por: MARTIN IRURZUN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO GUILLERMO FARAH, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ROBERTO JOSE BOICO, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: LAURA VICTORIA LANDRO, SECRETARIA DE CAMARA



#39958577#462631448#20250703125007441

Poder Judicial de la Nación

destrucción masiva, ello será comunicado al Ministerio Público Fiscal a fin de establecer si corresponde ejercer la acción penal. Cuando el análisis se encuentre vinculado con hechos bajo investigación en una causa penal, la Unidad de Información Financiera (UIF) podrá comunicar su sospecha directamente al juez interviniente” –conf. artículo 19-.

El 23 de diciembre de 2008 se dictó el Decreto 2226/08 por el cual se dispuso autorizar a la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA a intervenir como parte querellante en los procesos en los que se investigara la comisión de los delitos tipificados por la Ley N° 25.246 y modificatorias. Según se consignó, ello obedeció a que *“el Estado Nacional tiene un significativo interés institucional en satisfacer los deberes emergentes de los compromisos internacionales asumidos en la materia, tales como la "Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas" - Viena, 19 de diciembre de 1988- aprobada por nuestro país mediante la Ley N° 24.072, el "Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo" -Nueva York, 9 de diciembre de 1999- aprobado mediante la Ley N° 26.024 y la "Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional", aprobada mediante Ley N° 25.632, entre otros; por lo que se requiere que, con el máximo respeto a la división constitucional de poderes, el Poder Ejecutivo Nacional tome intervención en las actuaciones judiciales en las que se investigan hechos de tal gravedad”.*

Bajo ese catálogo dispositivo se cimentó la intervención de la Unidad de Información Financiera como querellante en las causas penales, conforme las interpretaciones que sobre sus alcances se han efectuado en diversos precedentes de este Tribunal (conf. nuestros votos al resolver el incidente CFP 2752/2016/5/CA3, con fecha 4 de mayo de 2021, registro n° 49722, y sus citas).

Sin embargo, y en el entendimiento de que *“las modificaciones que se propician por la presente medida permitirán dar acabado cumplimiento a*



las recomendaciones del GAFI y mejorar notablemente la capacidad de las instituciones del Estado Nacional para hacer frente al crimen organizado, en defensa de la seguridad de los ciudadanos y los intereses vitales de nuestro país”, el pasado 16 de abril del corriente año se publicó el Decreto 274/2025 que reorganiza la actividad de la Unidad de Información Financiera y, con ello, se modifican las normas de funcionamiento y acción que habían sido establecidas tanto por la ley 25.246 como por la ley 25.520 y por el Decreto 577/2017.

En lo que aquí respecta, la citada disposición derogó el Decreto 2226/2008 –conf. artículo 10º-.

Fue a partir de esto último que en autos se cuestionó la facultad de la Unidad de Información Financiera para continuar interviniendo como parte querellante y, previa vista a las partes, el juez se pronunció del modo apuntado al inicio.

IV. Ahora bien. El letrado que representa a la Unidad de Información Financiera expuso dos agravios centrales: a un lado, que el juez no había dado respuesta a los argumentos que brindó al contestar la vista; a otro, que el decreto solo regula a futuro y nada establece respecto de aquellos procesos dentro de los cuales ya se encontraba ejerciendo el rol de querellante.

Sobre el primer planteo, es necesario apuntar que la pretensión de la recurrente resulta contradictoria pues, mientras por un lado afirmó que *“la actuación de esta UIF en las causas en las que es parte querellante, se funda no sólo en la autorización que otorga el Decreto 2226/08 sino también en su función de garante de la protección y correcto funcionamiento del sistema de prevención de lavado de activos y del orden económico y financiero, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 25.246 y en los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina”*, aludiendo a las previsiones del artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación; por otro indica *“No parecería haber dudas respecto de lo legislado por dicha norma, en lo que respecta a la actuación futura de este Organismo y la imposibilidad de asumir nuevas querellas...”*.

Fecha de firma: 03/07/2025

Alta en sistema: 04/07/2025

Firmado por: MARTIN IRURZUN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO GUILLERMO FARAH, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ROBERTO JOSE BOICO, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: LAURA VICTORIA LANDRO, SECRETARIA DE CAMARA



#39958577#462631448#20250703125007441

Poder Judicial de la Nación

O bien afirma -y acredita- que su legitimación proviene del carácter de persona jurídica con capacidad para querellar en los términos del citado artículo 82 del código instrumental, o bien reconoce que aquella proviene de una autorización normativa que recientemente la excluyó de intervenir en causas penales.

Esa inconsistencia argumental exhibe, en rigor, el esfuerzo puesto para sostener la vigencia de un mandato expresamente revocado, afirmando que el hito normativo sólo le impide constituirse como querellante en causas penales pero no lo conmina ni ha sido la voluntad normativa la de disponer el abandono de la acción en aquellas en las que ya se encuentra interviniendo.

Sin embargo, validar esa interpretación implicaría desatender las razones y el sentido de la novel disposición. Téngase en cuenta que el Decreto 274/2025 en examen no se limita a dejar sin efecto el Decreto 2226/2008 que lo precedió sino que regula diversos aspectos de la vida institucional de la Unidad de Información Financiera, readecuando su estructura, sus misiones y objetivos hacia un horizonte incompatible con la interpretación que pretende.

En lo que al tema en debate atañe, surge de sus fundamentos *“Que en nuestro país, y de acuerdo al artículo 120 de la Constitución Nacional, el Ministerio Público Fiscal, como órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, es el encargado de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad...Que el esquema actual superpone la actividad de ambos organismos con el consecuente gasto de recursos humanos y económicos que conlleva y el riesgo de incurrir en contradicciones en el obrar...Que a los fines de dotar al funcionamiento de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) de una mayor autonomía, eficacia y eficiencia, en pos de evitar una "Influencia o Interferencia Indebida" en los términos de las recomendaciones del GAFI, y en virtud de las normas constitucionales y legales que regulan los diferentes roles y la actuación de la*



UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) y del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, corresponde derogar el Decreto N° 2226/08”.

Basta repasar tales fundamentos para concluir entonces que las razones que brinda la recurrente para fundar su mantenimiento en el rol -esto es, la ausencia de una expresa indicación normativa en contrario- se oponen al propio esquema delineado en el Decreto al cual se somete su actuación.

La decisión, entonces, no implica aplicar retroactivamente las disposiciones examinadas sino reconocer que en la actualidad, ese “interés institucional” al que se refirió el Decreto 2226/2008 ha sido reencausado hacia otros objetivos permaneciendo inalterable lo actuado hasta aquí.

En razón de lo apuntado, y siendo que los restantes cuestionamientos -atinentes a los tiempos, esfuerzos y tareas desempeñadas por la UIF- atañen a la órbita administrativa dentro de la cual ejerce sus funciones y, como tal, son ajenos al ámbito de incumbencia y decisión de esa sede penal, no cabe sino homologar el pronunciamiento del juez.

En virtud de lo expuesto, este Tribunal **RESUELVE:**

CONFIRMAR la resolución adoptada en todo cuanto decide y ha sido materia de recurso.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

EDUARDO GUILLERMO FARAH
JUEZ DE CÁMARA

ROBERTO JOSÉ BOICO
JUEZ DE CÁMARA

MARTIN IRURZUN
JUEZ DE CÁMARA

LAURA VICTORIA LANDRO
SECRETARIA DE CÁMARA

CN° 48.283; Reg nro 53.303

Fecha de firma: 03/07/2025

Alta en sistema: 04/07/2025

Firmado por: MARTIN IRURZUN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO GUILLERMO FARAH, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ROBERTO JOSE BOICO, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: LAURA VICTORIA LANDRO, SECRETARIA DE CAMARA



#39958577#462631448#20250703125007441